

Crédito, innovación y liberalización

La financiación de las explotaciones agrarias es un factor de creciente importancia a medida que el proceso de innovación tecnológica significa realizar inversiones para generar ventajas competitivas en un contexto de creciente liberalización internacional de los intercambios de alimentos.

En este contexto, la innovación afecta no solamente a la introducción de determinados avances científicos incorporados en bienes de capital, biotecnología, tecnología mecánica y química que afectan a las formas de cultivo y manejo ganadero, sino que también significan la introducción de técnicas modernas de gestión económica y de dispersión de los riesgos.

En este sentido, la innovación financiera ha significado en los últimos años la aparición de nuevos instrumentos y la creación de unos mercados alternativos para la captación de fondos. Las empresas agrarias en general, por su escasa dimensión y falta de conocimientos financieros, no han aprovechado las oportunidades de captación de fondos que esta vía abre. Sin embargo, la necesidad de abordar grandes proyectos de reforma de las estructuras y desarrollo rural es una ocasión que puede permitir a las entidades de crédito agrario abordar operaciones innovadoras para captar fondos en los mercados internacionales a menores tipos de interés y en condiciones de plazo más adecuadas al tipo de inversión que se pretende realizar.

Desgraciadamente, estas innovaciones financieras han sido escasas en los últimos años y el crecimiento de los fondos prestables para el sector agrario se ha realizado a través de los caminos tradicionales, lo que ha significado, al reducirse los fondos del crédito oficial y subir los tipos de interés, un encarecimiento de los costes financieros de las explotaciones que, unido al mayor volumen de impuestos soportados, reduce la proporción de renta disponible por el agricultor.

El agricultor español, ante la acuciante necesidad de obtener financiación para salvar los baches de tesorería provocados por las adversas condiciones meteorológicas y los bajos precios agrarios, ha recurrido de forma significativa a los préstamos «extra-sistema», que en muchos casos le permiten rebajar o anular incluso los costes financieros.

Los datos de Povedano (1993) indican que durante los últimos años (1984-1992) el coeficiente endeudamiento/VABcf ha crecido hasta situarse en el 63,8 % (34,4 % en 1984); si bien es cierto que este resultado viene influido por la sucesión de tres años de malas cosechas, la tendencia al crecimiento en su perspectiva histórica, es apreciable y clara.

En el período 1983-1992, el crédito crece un 125 % en pesetas corrientes y un 80 % en términos reales (1). Pero quizás es más relevante todavía determinar si el endeudamiento relativo de la agricultura es superior al de los otros sectores y cuál ha sido la evolución reciente.

Pues bien, la respuesta es que el coeficiente Deuda/PIB del sector agrario supera a la media nacional desde 1986, situándose siete puntos por encima en 1991 y 21 puntos porcentuales por encima del coeficiente Crédito Privado Total/PIB de la economía según los avances de datos para 1992. Esto configura al sector agrario y pesquero como el más endeudado de la economía si exceptuamos el de la construcción.

De todas formas, y aun sin olvidar que este tipo de comparaciones internacionales están sujetas a múltiples reservas de carácter estadístico, la agricultura española no parece ser de las más endeudadas en el contexto europeo.

Otra matización importante es que un porcentaje bastante alto de las orientaciones productivas (54 %) no tiene pendiente ningún crédito. Más de la mitad de las orientaciones técnico-económicas (OTE) de la muestra constante de la RECAN no tuvo ningún préstamo en el período 1983-1986.

Incluso entre las empresas que sí invierten es significativo que, a través de los datos contables, se aprecia un peso nada despreciable de los préstamos «extra-sistema» (familiares o no institucionales) detectables porque en muchos casos no se pagan intereses (70,3 % de la OTEs) y se amortizan por devolución en una sola vez (o dos o tres reducciones coincidiendo con buenas cosechas).

Los datos microeconómicos parecen indicar en general niveles bajos de endeudamiento (2), pero es preciso profundizar en su análisis para determinar qué tipo de empresas son las que presentan mayores demandas de fondos prestables.

En cualquier caso la información sobre el tipo de empresas agrarias demandantes de crédito es todavía bastante «primitiva» y lo que se puede deducir de datos macroeconómicos requeriría, para ser fiable, de una estimación solvente de la propensión al ahorro y al consumo de los agricultores.

Las Cajas Rurales

La nueva situación creada ante la integración de España en la CE, en 1986, y las perspectivas de creación de un mercado único europeo, puesto en marcha el último día de 1992, junto con el proceso de creciente liberalización del sistema financiero, se traducen en un marco jurídico que permite a los

bancos oficiales realizar operaciones activas, pasivas y comerciales.

En contrapartida no van a ser ya ni el MAPA, a través de sus programas específicos vinculados a determinadas políticas, ni las dotaciones directas del Estado las únicas fuentes de recursos. La colaboración con la política supranacional de la CE permite abrir nuevas vías de actuación, en especial la colaboración con el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar, entre otros, los programas del FSE (Fondo Social Europeo) y del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), que abren nuevas vías de colaboración del BCA con los Ministerios de Economía y Trabajo, por un lado, y con las CCAA, por otro.

Pero en la medida en que parte importante de la actividad requiere ahora la captación de activos y pasivos en el mercado, resulta imprescindible contar con una red de oficinas que permita acercar la institución al cliente, máxime cuando en el mercado bancario español se ha demostrado que la proximidad geográfica es una de las variables cruciales que manejan los clientes de las entidades.

Desde el punto de vista de las Cajas Rurales la posibilidad de actuar como un grupo financiero presentaba ventajas evidentes como, por ejemplo, mayor facilidad para colocar los excedentes de liquidez, mejoras en la gestión de tesorería, extensión geográfica de los servicios, posibilidad de centralizar determinadas unidades, y otras, que en conjunto les habrían permitido consolidarse como las primeras instituciones financieras del mundo rural.

Sin embargo, en 1983, el proceso de creación del grupo asociado se saldó sólo con un éxito parcial, ya que parte de las Cajas Rurales (18 entidades), tras denunciar el convenio con el BCA en 1988, decidieron asociarse con un grupo financiero extranjero. La desconfianza hacia el poder central y las diferencias políticas parece que posiblemente jugaron su papel, junto a otros factores de la negociación, para llegar a este resultado final.

El tiempo que duró la asociación BCA-Cajas Rurales demostró las posibilidades de esa forma de actuación: se aceleró la concesión de créditos y ganaron cuota de mercado.

Al fraccionarse el grupo asociado de Cajas Rurales, la gran beneficiada, de hecho, de esta situación parece que de momento ha sido la banca privada, que ha terminado consolidándose como la primera suministradora de créditos al sector agrario en los primeros años noventa.

Según las estimaciones de Tarrafeta (1991), las Cajas Rurales no asociadas al BCA mantienen una

cuota del 17,7 % del mercado agroalimentario de crédito, mientras que la banca pública y el Grupo Asociado con el BCA mantienen el 18,8 %.

A pesar de todo, la reacción del BCA abriendo nuevas sucursales ha permitido seguir expandiendo el volumen de negocio del grupo «reducido» (3) que permanece asociado, y disminuir la dependencia de las entidades que gestionaban sus préstamos.

Simultáneamente, el BCA abre nuevas líneas de actuación como la financiación de inversiones en el medio rural (telefonía, electrificación, inversiones en infraestructura, etc.) (Calleja, 1991).

Desde 1991, las cooperativas de crédito han sido asimiladas en posibilidades operativas a los bancos, lo que les permitirá nuevas posibilidades de expansión. Esto plantea también un problema estadístico en la interpretación de las series, ya que parte de los préstamos que se asignaban mecánicamente como destinados a actividades productivas agrarias pueden ahora estar siendo destinados a financiar consumo de las familias rurales.

Por otra parte, la constitución de Argentaria como grupo de la banca pública podría marcar una nueva forma de actuación del grupo de cajas asociadas al BCA, pero esto es sólo una posibilidad; la realidad actual es que sufren la dura competencia de las entidades privadas en el medio rural. Estas últimas han ampliado su cuota de mercado entrando en líneas de financiación que antes estaban reservadas al crédito oficial y tratando de rentabilizar su red de oficinas con operaciones de activo.

Las Cajas de Ahorro

La evolución de la cuota de mercado, de las instituciones prestamistas a la agricultura, muestra cómo la tendencia de las Cajas de Ahorro y de las Cajas Rurales han seguido caminos contrapuestos.

El crédito agrario de las Cajas de Ahorro creció muy rápidamente desde 1964 a 1970, superando en volumen a la banca privada e igualando a la banca oficial, al multiplicar por más de cuatro los saldos vivos al final del período. La importancia de este crecimiento puede apreciarse si se tiene en cuenta que volverlo a repetir, en pesetas corrientes y a pesar de la aceleración de la inflación, les costó a las Cajas de Ahorro los siguientes doce años.

Resulta difícil determinar en qué medida la ganancia de cuota de las Cajas Rurales se vio favorecida por un cambio de orientación de las Cajas de Ahorro hacia el negocio de las zonas urbanas o si, por el contrario, fue el buen aprovechamiento

que hicieron las Rurales de su posición como entidades colaboradoras del BCA al gestionar las líneas de crédito oficial. En cualquier caso, es preciso señalar que los créditos de intermediación descendieron desde el 27,4 % a principios de los setenta al 9,6 % en 1981 (Tarrafeta, 1983).

Las Cajas de Ahorro confederadas contaban por su parte con una red de oficinas que triplicaba a la de las Cajas Rurales. Antes de la reforma del sistema bancario de 1962-1963, las Cajas de Ahorro ocupaban el último lugar por entidades en cuota de mercado con un 11 % del total del crédito. Pero el cumplimiento de las disposiciones legales sobre coeficientes obligatorios les llevaron a elevar su participación hasta el 31 % en 1970.

En los años sesenta, las Cajas Rurales, al igual que las Cajas de Ahorro (del 2 % en 1960 al 11 % en 1970) ganaron cuota de mercado en perjuicio de la banca privada, que perdió aproximadamente el 20 % de cuota, y de la banca oficial, que cedía un 10 %.

Pero al derogarse en 1973 la disposición que obligaba a las Cajas de Ahorro a mantener un coeficiente de inversión obligatorio en la agricultura, éstas se orientaron al medio urbano, perdiendo rápidamente cuota de mercado en la financiación agraria. Esta pérdida fue muy rápida hasta 1976 y más lenta después. En cualquier caso, ya desde 1976 pasan a ocupar el último lugar entre las entidades suministradoras de crédito al sector agrario (Larrea, 1986).

Las Cajas de Ahorro perdieron cuota en el crédito agrario y pesquero hasta 1984 (14,6 %), para luego recuperarse hasta 1989 (23 %). Parece existir un cierto «intercambio» entre cajas Rurales y Confederadas en este mercado. Como destaca Tarrafeta (1991):

«... la pérdida de seis puntos porcentuales experimentada por las cajas rurales entre 1984 y 1990 se compensa perfectamente con un aumento de cuota similar, entre los mismos años, por parte de las cajas confederadas» (pág. 203).

En cualquier caso, el año 1989 parece marcar un máximo en la cuota de mercado de las Cajas de Ahorro Confederadas, y también el inicio del retroceso de más de cuatro puntos que han experimentado como suministradoras de crédito productivo al sector agrario (Povedano, 1993).

La banca privada

La banca privada era la primera suministradora de créditos a la agricultura en 1960, con una cuota

CUADRO 1
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN EL CREDITO PRODUCTIVO TOTAL AL SECTOR AGRARIO

Años	Total	%	Bancos	%	Cajas de Ahorro	%	Cooperativas de créditos	%	Crédito oficial	%
1984	566,4	100	239,6	42,3	187,4	33,0	97,5	17,2	41,9	7,3
1985	624,6	100	269,2	43,0	198,7	31,8	111,6	17,8	45,1	7,2
1986	692,4	100	275,1	39,7	236,0	34,0	130,4	18,8	50,9	7,3
1987	778,4	100	298,2	38,3	271,3	34,8	156,3	20,0	52,6	6,7
1988	898,6	100	365,5	40,6	318,4	35,4	151,1	16,8	63,6	7,0
1989	966,9	100	385,3	39,8	345,4	35,7	163,7	16,9	72,5	7,4
1990	1.036,1	100	447,3	43,1	351,6	33,9	169,4	16,3	67,8	6,5
1991	1.134,6	100	462,8	40,7	363,6	32,0	230,4	20,3	77,8	6,8
1992	1.279,5	100	568,8	44,4	376,2	29,4	263,5	20,5	71,0	5,5

Fuente: Povedano, 1993.

de mercado próxima a la mitad del volumen de crédito al sector. Sin embargo, fue perdiendo cuota sistemáticamente hasta 1970 por la competencia de las Cajas de Ahorro y de las Cajas Rurales.

Entre 1970 y 1975, recuperó parte de la cuota de mercado perdida en detrimento de la participación de las Cajas de Ahorro y, en menor medida, de la banca oficial.

Pero nuevamente perdió terreno entre 1975 y 1980 por la competencia de las Cajas Rurales, que lograron desplazarla del primer puesto (4).

En 1985 la banca privada mantenía aproximadamente la tercera parte del mercado de crédito a la agricultura. Sin embargo, las estimaciones de cuota de mercado dependen de que se consideren los saldos al final del ejercicio del crédito al sector agrario y pesquero como hace Tarrafeta (1991, cuadro 1), con lo que la cuota de la banca privada pasa del 30,6 % (1981) al 27,8 % (1984) y al 25,8 % (1987), para luego recuperarse hasta alcanzar el primer lugar con el 30,8 % (1990).

O de que se considere sólo el crédito productivo al sector agrario (sin pesca) de las entidades financieras, criterio que sigue Povedano (1993, cuadro 2), resultando una caída de la cuota desde el 42,3 % (1984) al 38,3 % (1987), para luego recuperarse nuevamente hasta el 40,7 % (1991).

Por tanto, cualquiera que sea el criterio seguido se puede afirmar que en 1990 la banca privada ocupa el primer lugar en el mercado de crédito para la agricultura. Además, esta posición se refuerza si se incluye el crédito pesquero y, especialmente, si se tiene en cuenta que predomina claramente en el crédito a la agroindustria.

Si consideramos el crédito al sector agroindustrial (es decir, incluyendo el pesquero y el destinado a la industria de alimentación), el ciclo reciente de la cuota de mercado de la banca privada

es similar al que acabamos de reseñar: cae hasta un mínimo del 42,7 % (1987) y luego se recupera hasta el 43,7 % en 1990 (Tarrafeta, 1991, cuadro 2).

La competitividad de la banca privada se basa en la preponderancia de la banca comercial en la financiación de la tesorería de las explotaciones por la agilidad en la concesión de los préstamos a corto plazo y el conocimiento de los clientes que les permite evitar la obtención de garantías reales, especialmente en los pequeños préstamos Larrea (1986). En esta actuación juega un papel importante la amplia red de oficinas con la que cuenta, donde las relaciones se establecen muchas veces captando al cliente por las cuentas de ahorro y corrientes, con los servicios complementarios a que éstas llevan.

Pero sin duda, lo que ha supuesto un vuelco en la cuota de mercado de las entidades privadas en 1992 han sido los efectos del cambio de normativa y de ejecución del programa de estructuras agrarias. Gracias al convenio firmado por el MAPA y las instituciones privadas, estas últimas han podido gestionar por primera vez los créditos agrarios con subvenciones al tipo de interés.

Según las primeras estimaciones disponibles (Povedano 1993, cuadro 2) esto ha permitido pasar a los bancos privados del 40,7 % (1991) al 44,4 % (1992).

La banca oficial

La cuota de mercado de la banca oficial se situaba en 1960 cercana al 40 % del mercado de crédito agrario, pero ya en los primeros cinco años de la década perdió casi diez puntos, para estabilizarse en el siguiente quinquenio. Durante toda la

década de los años setenta, la banca oficial ha continuado perdiendo cuota de mercado.

Los préstamos «extramercado» de la banca oficial han pasado del 59,1 % (1970) al 31,4 % (1980), si bien luego han experimentado una cierta recuperación debido a la atención prestada a zonas con problemas especiales (sequía, inundaciones, etc.).

En cualquier caso, en los años ochenta resulta evidente que la necesidad de captar una parte creciente del pasivo en el mercado lleva al racionamiento de los recursos prestables en condiciones especiales (dinero barato). En consecuencia, crece el crédito ordinario gestionado por los bancos oficiales y también la penetración de las entidades privadas en el negocio.

El crédito oficial ha ido perdiendo cuota de mercado poco a poco en los últimos años. Ya hemos visto las consecuencias del fraccionamiento del grupo asociado Cajas Rurales-BCA. En cualquier caso, parece claro que los principios que van a informar la actuación del grupo Argentaria en el mercado financiero van a estar determinados por la necesidad de competir con el resto de las entidades. Esto, junto con la «crisis teórica» del crédito oficial, hace prever una ruptura con las actuaciones del pasado y una mayor actividad como gestor de determinados programas junto a entidades competidoras, en ese plano, al igual que compiten en la prestación del resto de los servicios bancarios.

Por otra parte, el BCA, al tiempo que expande sus créditos de «mercado», adquiere mayor peso en su cartera la financiación de la Industria y servicios de distribución de alimentos, que en 1991 alcanzan ya el 58,1 % de las cesiones de crédito, frente al 39,7 % de la agricultura.

Tipos de interés

Lógicamente, la disminución de los recursos aportados por los organismos oficiales tanto directamente como a través de los bancos oficiales ha llevado a un encarecimiento de los recursos disponibles para la financiación de las explotaciones.

El tipo medio del crédito agrario, según los cálculos de Tarrafeta (1983), pasa del 6,8 % (1971) al 13,4 (1981).

Sin embargo, posiblemente sea más importante destacar que eso significa, según los datos del Banco de España, pasar de tipos de interés reales negativos a positivos en el mismo período. Es más, los tipos de interés reales de los créditos siguieron creciendo durante la primera mitad de los años ochenta.

Según los cálculos de Tarrafeta (1983), las subvenciones al tipo de interés medio de los créditos agrarios significan un 10,2 % de la inversión privada media, sin mejoras por cuenta propia, del período 1977-1981. Esto significa un 22,5 % de los intereses devengados en ese período.

En 1985, el grupo asociado BCA-Cajas Rurales proporcionaba más de la mitad de la financiación bancaria a la agricultura, según Calleja (1991), pero las estimaciones de Povedano (1993) reducen la cuota de crédito productivo al sector agrario de la banca oficial y las cooperativas de crédito a menos de la cuarta parte.

Discutir las ventajas de subvencionar el tipo de interés frente a otras formas de ayuda directa no parece que tenga mucha utilidad en la actualidad. Las tesis que defendían, el efecto de sobrecapitalización inducido, lo inequitativo de una subvención generalizada al sector, el posible desvío de los créditos subvencionados hacia el consumo, y la necesidad de sustituirlos por otro tipo de ayudas, se puede decir que ya han triunfado plenamente.

Otra historia es discutir si las alternativas de apoyo directo a las explotaciones o a los programas de desarrollo regional son más eficientes, y hasta qué punto pueden aparecer problemas de discrecionalidad en la concesión y rozamientos por la burocratización del sistema, que, además de afectar a la eficiencia del sistema, encarezcan el coste final de los programas. De todas formas, conocer el coste de gestión de estos programas va a resultar bastante complicado.

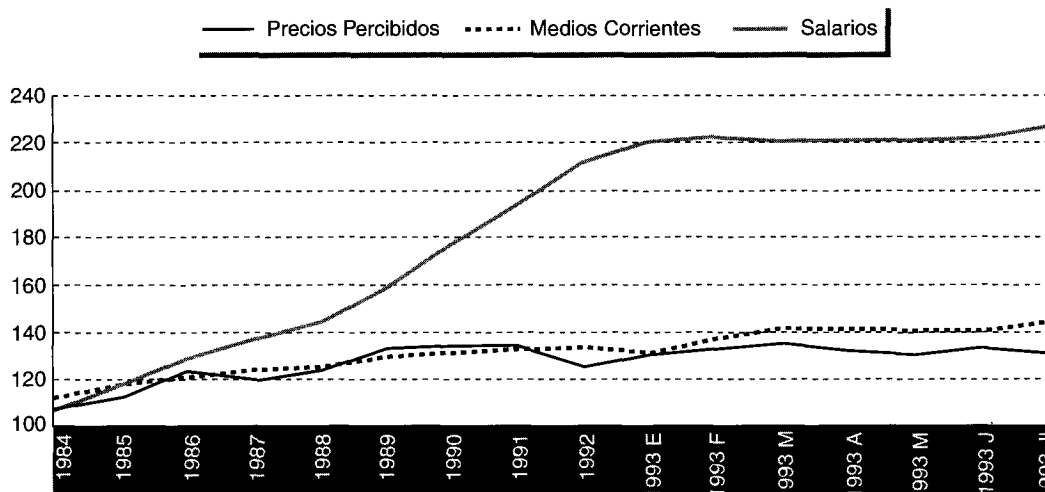
Por otra parte, el año 1993 ha puesto de manifiesto la resistencia de las entidades financieras a reducir los tipos de interés de los créditos concedidos, a pesar de la clara tendencia a la baja de los tipos de referencia.

Los problemas financieros de los agricultores

Coincide, a principios de los años setenta, el descenso de la participación del crédito oficial a la agricultura y el crecimiento de las transferencias negativas vía precios del sector agrario al resto de la economía, que induce un deterioro del índice de participación del ahorro agrario en la FBCF del sector.

Curiosamente, Tarrafeta (1983), San Juan (1983), Larrea (1986) y Colino y otros (1990) coinciden en señalar cómo el origen de los problemas financieros de los agricultores está en la caída de la rentabilidad de las explotaciones, que se produce a

GRAFICO 1
PRECIOS Y SALARIOS AGRARIOS
 (1983 = 100)



El crecimiento espectacular de los salarios agrarios en los años anteriores parece haberse frenado pero, sin duda, es un elemento que explica las dificultades de los agricultores para obtener rentabilidades suficientes como las requeridas para pagar los tipos de interés de mercado en los créditos que, por las excepcionales condiciones meteorológicas de 1992, tuvieron que pedir. La relación de precios percibidos/pagados por los agricultores también empeoró hasta julio de 1993, aunque a partir de septiembre se produce una aceleración de los precios en origen que ha terminado repercutiendo ampliada por la devaluación de la peseta, en el IPC-Alimentación de diciembre de 1993. Sin embargo, no debe olvidarse que la moderación de la inflación subyacente debe valorarse por encima de las fluctuaciones inducidas por causas coyunturales.

Fuente: BMEA, núm. 10, octubre 1993.

raíz del deterioro de la relación real de intercambio de los productos agrarios desde 1973.

Independientemente de cuál sea la necesidad o capacidad de financiación del sector, lo verdaderamente importante para el empresario individual es su propio equilibrio financiero. En definitiva, el auténtico problema es no poder devolver los créditos vencidos (morosidad), y, en último extremo, la quiebra o suspensión de pagos.

Antes de entrar en el análisis de las peculiaridades del sector se pueden anotar las tranquilizadoras cifras del INE sobre suspensiones de pagos, donde sólo un 2 % del total corresponde al sector, cifra similar a la de quiebras, 2,2 %.

Sin embargo, es preciso recordar que los pequeños agricultores ni quiebran ni suspenden pagos se convierten en pluriactivos, asalariados, emigrantes, etc. La desaparición de 55.000 agricultores durante 1993 tiene una lectura más negativa que la que permite la contemplación de los incrementos de la renta por ocupado. Esta ha crecido a largo plazo en términos reales de 506 (1982) a 693,1 (1992), si bien 1992 significó un retroceso respecto a 1991 (760,2 miles de pesetas de 1982 por

ocupado). El ejercicio 1993 se cierra, según las primeras estimaciones disponibles, con un crecimiento interanual de la renta por ocupado del 21,3 % según los datos del MAPA, y del 10 %, según las estimaciones del Comité de Organizaciones Agrarias (COPA), de la CE.

Pero si se formula el problema desde la perspectiva puramente crediticia, las informaciones de la banca privada, cuya cifra de crédito a la agricultura sólo supone del orden del 2 % del total de crédito vencido, parecen indicar una morosidad de los agricultores del orden de dos puntos por encima de la media de la economía en 1992. Por tanto, parece que algunos agricultores, después de varios ejercicios con malos resultados, empiezan a tener problemas financieros. Los expertos consultados cifran la morosidad agraria durante 1992 en una banda del 5 al 6 %, entendiendo por morosidad, no el simple retraso en los pagos, sino retrasos que obligan al banco prestamista a dotar prestaciones por insolvencia.

En cualquier caso, este dato hay que manejarlo con prudencia al referirse a un año agrario malo, después de otros dos nada buenos en general.

Nivel de endeudamiento de la agricultura

Al hablar del nivel de endeudamiento de un sector cualquiera de la economía española, y especialmente si se trata de un sector con fuerte peso de los empresarios individuales, es preciso tener en cuenta que de los aproximadamente 32 billones de pasivos de las familias y empresarios individuales sólo catorce billones de este pasivo corresponden a las instituciones financieras. El resto, o sea más de la mitad, es crédito no intermediado (ventas a plazos, letras, interfamiliar, interempresarial, etc.). En general, se puede esperar que en períodos de racionamiento del crédito, o de endurecimiento de las condiciones para concederlo, los empresarios recurrirán en mayor proporción a esta financiación no intermedia.

Una muestra de la importancia de este crédito no intermediado la tenemos en la aparición sistemática de créditos sin intereses que figuran en los datos contables de las explotaciones. Pero se puede imaginar fácilmente que otros pequeños créditos se obtienen en la adquisición de bienes con papel comercial, a plazos, o simplemente por acuerdos informales.

Por tanto, el problema principal, cuando hablamos de un sector con fuerte peso de los empresarios individuales, es que sabemos que la mayor parte de su endeudamiento existe, pero no lo podemos asignar sectorialmente.

Del endeudamiento contraído a través de los intermediarios financieros sí tenemos información suministrada por las entidades. De todas formas, es preciso recordar que la asignación sectorial de los créditos también puede estar sujeta a ciertas desviaciones. En concreto, en el sector agrario, al no establecerse muchas veces una clara distinción entre las cuentas de la explotación agraria y las de las familias de los empresarios, determinados créditos al consumo de las familias se asignan como crédito agrario. □

NOTAS

- (1) Usando el deflactor del PIB agrario, si se utiliza como deflactor el Índice de Precios Percibidos por los agricultores, el crecimiento del coeficiente endeudamiento/VABcF es del 97 % en términos reales, y para el mismo período, si se usa el IPC como deflactor, el crecimiento del coeficiente cae al 35 % (Povedano, 1993).
- (2) De todas formas estos datos no están todavía procesados para los últimos años donde el endeudamiento parece haberse disparado por los malos resultados de las explotaciones.
- (3) El convenio BCA-Cajas Rurales de 1981 fue firmado por 24 Cajas, la mayoría comarcales y locales, a las que hay que sumar 9 Cajas en saneamiento asociadas, 6 de ellas, por un convenio anterior.
- (4) De todas formas, las cuotas que maneja Larrea (1986) p. 24, citando como fuente al Banco de España, no coinciden con los datos de cuota de mercado elaborados por Tarrafeta (1983) p. 209. El motivo parece ser una ruptura de la serie de crédito a la agricultura en 1980 (142,5 m.m. pts en 1979 según los datos del MAPA, 1986, pág. 54).

BIBLIOGRAFIA

- Calleja, Daniel (1991): «Perfil histórico del BCA». *Cuadernos del BCA*, núm. 1, pp. 13-70.
- Colino, J., y otros (1990): *Precios, productividad y renta en las agriculturas españolas*. Edic. UPA/Mundi-prensa. Madrid.
- Larrea, S. (1986): «La evolución del crédito a la agricultura en España durante los últimos 25 años». *Situación*, núm. 4, pp. 5-29.
- MAPA (1986): *Cuentas del Sector Agrario*, núm. 13. MAPA. Madrid.
- Maroto, Concepción (1987): *El crédito agrario en la Comunidad Valenciana. Un análisis de la demanda*. Valencia, Generalitat Valenciana. Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Povedano, E. (1993): «El endeudamiento del sector agrario». *El Boletín*, núm. 4, mayo, pp. 6-13.
- San Juan, C. (1983): *Eficacia y rentabilidad de la agricultura española*. MAPA. Madrid.
- Tarrafeta, L. (1983): «Financiación de la agricultura española». *Papeles de Economía Española*, núm. 16, pp. 203-227.
- Tarrafeta, L. (1990-1991): «Crédito al sector agrario». *Economistas*, núm. 47, pp. 202-205.